

¿JUSTICIA ELECTORAL DE GÉNERO? UNA APUESTA PARA LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

GENDER ELECTORAL JUSTICE?
A WAGER ON CONSTITUTIONAL DEMOCRACY

AUTORA: FLOR ANGELI VIEYRA VÁZQUEZ*

INTRODUCCIÓN

La noción de democracia constitucional implica un modelo de organización político-jurídica que busca por un lado, establecer el contenido de las decisiones, es decir, qué cosa es legítimo o no es legítimo decidir y, por otro lado, establecer las formas en que las decisiones son adoptadas, dicho de otro modo, *quién y cómo* está autorizado para adoptar decisiones legítimas, de tal suerte que el primer aspecto responde al componente del Constitucionalismo, mientras que el segundo al de la democracia.

En este sentido, al señalar la delimitación del poder político, estamos hablando de la separación de poderes, donde el poder judicial y, por tanto, la justicia electoral, adquiere un papel importante para equilibrar las reglas del juego democrático, pero también para asegurar que los derechos humanos de todas las personas se respeten, mostrándonos su trascendencia en las dos dimensiones que constituyen la democracia constitucional.

Desde el componente democrático, con mayor frecuencia se suele hacer uso de la noción de *régimen electoral de género*, para estudiar a aquellas reformas electorales que han impulsado la representación descriptiva y sustantiva de las mujeres, por ello, desde el componente del constitucionalismo, esta investigación busca analizar ¿cuál es el papel de la justicia electoral entorno a la desigualdad entre hombres y mujeres? y reflexionar si es posible hablar de una noción de *justicia electoral de género* cuyo fin contribuya a revertir la desigualdad estructural e histórica entre unas y otros.

Considerando la experiencia histórica de México, es posible advertir que las sentencias emitidas por el TEPJF constituyen un marco de referencia obligado que ha permitido proponer soluciones empíricas para fortalecer nuestra democracia constitucional haciéndola más paritaria, sustantiva e incluyente, sin embargo, también es necesario insistir

* Maestra en Estudios de la Mujer (UAM-X) y Licenciada en Ciencia Política (UAM-I). Actualmente estudia el Doctorado en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, es docente en la UNAM y Consejera Local del INE en el Estado de México. Correo electrónico: angelivieyra@gmail.com

que no basta con la asertividad judicial si ésta no se encuentra acompañada de una epistemología feminista e intercultural.

Para lograr lo anterior, esta investigación se encuentra dividida en tres partes: en la primera de ellas, se presenta una reflexión de la democracia constitucional desde la categoría analítica de género; en la segunda parte, se presenta el vínculo entre la justicia electoral y las nociones de igualdad y equidad; finalmente, en la tercera parte, a manera de pregunta, se busca reflexionar si es posible hablar de una justicia electoral de género y cuestionar cuáles serían los alcances de ésta.

1. Género: ¿Una categoría útil para el análisis de la democracia constitucional?

El nombre de este apartado es la paráfrasis de un texto escrito por Joan W. Scott en 1986 bajo el nombre de “El género: una categoría útil para el análisis histórico” Lo retomo porque actualmente cada vez escuchamos con mayor frecuencia el uso de la categoría género en el discurso, sin embargo, resulta necesario preguntarnos qué implica dicha categoría y, para efectos de esta investigación, cuestionarnos si es útil para el estudio de la democracia constitucional.

En 1986, Joan Scott, sostenía que el género es una categoría de análisis constitutiva de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es, al mismo tiempo, una forma primaria de relaciones significantes de poder (Scott, 2013: 289). Posteriormente, en 2011 en un texto que tituló “Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?” argumenta que la utilidad de la categoría género no depende de la palabra en sí, sino de los usos críticos que seguimos haciendo de ella. Para la autora, género sigue siendo una categoría útil “si se toma como una invitación a pensar de manera crítica sobre cómo los significados de los cuerpos sexuados se producen en relación el uno con el otro, y cómo estos significados se despliegan y cambian” (Scott, 2011: 98). Sugiere ir más allá de los roles asignados a las mujeres y a los hombres y poner el énfasis en la construcción de la diferencia sexual. Sostiene que no existe una esencia de lo que implica ser mujer u hombre, estas palabras no poseen un referente fijo ya que no son identidades estables a través del tiempo (Scott, 2011: 98-99). Concluye con la siguiente afirmación:

El género es, yo diría, el estudio de la difícil relación (en torno a la sexualidad) entre lo normativo y lo psíquico, el intento de a la vez colectivizar la fantasía y usarla para algún fin político o social [...] en este proceso, es el género el que produce significados para el sexo y la diferencia sexual, no el sexo el que determina los significados del género [...] es una categoría útil para el análisis porque nos obliga a historizar las formas en las cuales el sexo y la diferencia sexual han sido concebidos (Scott, 2011: 100).

Por su parte, en 1989 Teresa de Lauretis establece cuatro proposiciones en torno al género: 1. El género es (una) representación con implicaciones reales tanto sociales como subjetivas “es tanto el producto como el proceso de su representación” (Lauretis, 1989: 11); 2. “La construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación [...] de la

representación y de la autorepresentación”. (Lauretis, 1989: 15); 3. “La construcción del género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género (por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por ejemplo, teorías) con poder para controlar el campo de la significación social y entonces producir, promover e «implantar» representaciones de género” (Lauretis, 1989: 25); 4. “En consecuencia, paradójicamente, la construcción del género es también afectada por su deconstrucción” (Lauretis, 1989: 9).

Esta perspectiva de Lauretis resulta relevante porque ella busca ir más allá de la diferencia sexual como punto de partida y al género como su consecuencia, entiende a esta última categoría como una realidad más compleja, que es producto y productor al mismo tiempo, la analiza como una tecnología que es constitutiva de las personas. En este sentido, esta propuesta sugiere pensar el género no sólo como una categoría de análisis que ayuda a explicar las relaciones de subordinación entre mujeres y hombres sino también a pensar cómo la subjetividad (experiencia) de las personas, en tanto sujetos individuales, juega un papel importante para su reproducción ya que el género no opera sistemáticamente, sino que requiere de la agencia de las personas para reproducirlo.

A lo largo del tiempo, diversos feminismos han cuestionado la utilidad de ciertas categorías para aplicarlas en el análisis de su contexto y, la de género no ha sido la excepción. Las propuestas radican en entrecruzar el género con otras categorías para lograr un análisis más integral donde la opresión posee diversas aristas y no se trata únicamente de relaciones de poder basadas en la diferencia sexual o las relaciones entre los sexos (Curiel, 2011: 217). Con base en lo anterior, nos encontramos frente a un escenario donde el género sigue siendo una categoría útil porque se entrecruza con las identidades de las personas e inevitablemente, trastoca el ejercicio de sus derechos humanos, “esta perspectiva ha abierto la posibilidad de ubicar culturalmente las experiencias de las mujeres y entender que el género no es una categoría universal, estable y descontextualizada” (Curiel, 2007: 101). En este sentido, desde una epistemología feminista, tendríamos que plantear cómo mejorar la democracia constitucional en su ámbito procedimental (reglas de quién y cómo acceder al poder político) hasta su ámbito sustancial (garantía de derechos humanos para los y las ciudadanas, así como la separación de poderes). Desde el componente de constitucionalismo es necesario incentivar el tránsito de una cultura de la legalidad a una cultura de constitucionalidad a través del género.

Hacia el final del texto de Lauretis anteriormente referido, la autora plantea el siguiente cuestionamiento “¿En qué términos y en interés de quiénes es producida la de-re-contrucción? esta pregunta resulta relevante porque nos permite reflexionar de qué manera la democracia constitucional, el derecho y la justicia electoral pueden ser tecnologías que cambien las relaciones de género desde un enfoque feminista, que permita reducir las desigualdades entre unas y otros y entre las mismas mujeres o, por el contrario, perpetúen y reproduzcan las existentes.

2. Justicia electoral, igualdad y equidad

La noción de democracia constitucional implica un modelo de organización político-jurídica que tiene dos objetivos: limitar el poder político y distribuirlo entre las y los ciudadanos con la consideración de un marco de derechos fundamentales que contemplan: derechos de libertad, derechos políticos y derechos sociales. Sus ideales son: 1) establecer el contenido de las decisiones, es decir, qué cosa es legítimo o no es legítimo decidir; 2) establecer las formas en que las decisiones son adoptadas, dicho de otro modo, *quién y cómo* está autorizado para adoptar decisiones legítimas. Con base en lo anterior, el primer ideal responde al componente del Constitucionalismo, mientras que el segundo, al de la democracia. En conjunto, la democracia constitucional puede definirse como: El régimen (o forma de gobierno) donde el ejercicio del poder de decisión colectiva se encuentra formal y materialmente limitado (Salazar, 2013: 45-57).

Este último aspecto es particularmente relevante porque al hablar de la delimitación del poder político, estamos hablando de la separación de poderes, donde el poder judicial y, por tanto, la justicia electoral, adquiere un papel importante para salvaguardar las reglas procedimentales de la democracia, es decir, las reglas para acceder al poder político sin detrimento de los derechos humanos de ninguna persona. Sin embargo, antes de explicar qué entendemos por justicia electoral, vale la pena comenzar por hacer algunas precisiones respecto a las nociones de justicia, equidad y al papel de la lucha política en su materialización.

En la mayoría de los casos, al hablar de “democracia” presuponemos la participación de los y las ciudadanas en la vida pública. Ello nos conduce a plantearnos si tal condición

ocurre en nuestro país. Cuando asumimos que México es un país democrático, nos podemos preguntar en qué espacios de la vida social ha permeado este término. Hoy en día se exige que la democracia comience en casa, para incentivar la paulatina transformación de la cultura hacia un camino de igualdad entre mujeres y hombres a partir de la deconstrucción de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, cada vez que alguno de ellos o ellas se encuentre en desventaja. El continuum democrático en el que se encuentra nuestro país requiere que construyamos relaciones más igualitarias en la participación política formal entre mujeres y hombres, tratando de incentivar un espacio más justo entre ambos.

Es necesario reconocer cómo a través de las luchas políticas-sociales de mujeres y hombres ha sido posible hacer efectivos derechos que en su momento sólo fueron un aparato normativo con “dientes que no podían morder”.¹ A menudo se suele contraponer lo que “debe ser” de lo que “es”, por ejemplo, “deberían” existir relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, pero lo que vemos día a día en los diversos ámbitos de la vida social, “son” relaciones desiguales, donde persisten las relaciones de dominación y, por tanto, de subordinación.

Para tratar de dilucidar esta compleja relación entre el “deber ser” del derecho, es decir, su nivel prescriptivo y lo que “es” el derecho, esto es, su nivel descriptivo, se hará uso de la teoría Kantiana del Derecho que combina las dos visiones anteriores con una propuesta práctica que posibilita cerrar la brecha entre ambos.

Para Kant cualquier teoría que pretenda explicar la complejidad del fenómeno jurídico debe moverse en tres niveles distintos: un nivel empírico donde se asume la perspectiva de un observador (uso teórico de la razón) para describir lo que el derecho es... Un nivel normativo, el cual presupone tomar la perspectiva del participante (uso práctico de la razón) ... Un nivel pragmático, en el que se plantea que no basta establecer un simple contraste entre lo que el derecho es y lo que el derecho debe ser, sino que se requiere asumir el compromiso de buscar medios más adecuados para aproximar, en cada sociedad particular, los dos niveles anteriores (Serrano, 2011: 142).

¹ La expresión remite al epígrafe que utiliza John Austin en uno de sus textos, autoría de E. A. Hoebel que señala: “La ley, hay que repetirlo de nuevo, tiene dientes que pueden morder” Véase: Riddall, J. G. (1991). Teoría del Derecho, Ed. Gedisa, España, pág. 33.

Los tres niveles son importantes y necesarios para tratar de modificar las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, pero en el último se encuentra la posibilidad práctica de transformación no sólo del orden normativo, sino también de la cultura, asumiendo nuestro papel de agentes activos, de cambio y de transformación y no de seres pasivos únicamente como receptores.

En este contexto comenzaremos por reflexionar sobre la paridad en estos niveles. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que establece que el “El varón y la mujer son iguales ante la ley”, con ello, podemos observar que existe un reconocimiento formal, no obstante, en la práctica, este ordenamiento jurídico no siempre se ve materializado. Y esto nos conduce a preguntarnos por la validez de las normas, misma que hallará su legitimidad en el reconocimiento y garantía de la libertad de las personas que se someten a ella de forma libre, pues de lo contrario, si un ordenamiento jurídico hiciera uso exclusivo de la coacción para su obediencia y no de la legitimidad, estaríamos hablando de un orden jurídico autoritario.

Bajo este tenor es necesario preguntarnos ¿Qué garantiza la libertad de las y los ciudadanos? Para ello, es importante precisar que la condición de libertad implica la garantía de derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, de tal forma que sea posible establecer una relación de reciprocidad, pues al garantizar mi reconocimiento como ciudadano o ciudadana, al mismo tiempo se me reconocen derechos y obligaciones que son propios de dicha condición.

De ser así, resulta lógico y conveniente respetar y cumplir el orden normativo, ya que al cumplir con mis obligaciones adquiero la facultad de exigir y gozar de mis derechos, entre ellos, dos básicos: igualdad y libertad. Siendo éste último de suma importancia porque me permitirá a partir de la razón y por tanto de la ventaja ante la previsión de expectativas, someterme al ordenamiento jurídico y al mismo tiempo darle validez, pues “el derecho es el conjunto de las condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro, según una ley universal de la libertad (Serrano, 2011: 144), Kant agregaría que el reconocimiento de la libertad es lo que nos permite quejarnos de la injusticia que pueden generar normas particulares.

Con base en lo anterior, habría que preguntarnos ¿Por qué las mujeres tendrían que respetar las leyes de un ordenamiento jurídico?, la posible respuesta señalaría que es porque

reconoce la libertad de las mujeres al considéralas ciudadanas con obligaciones y derechos, de tal forma que el reconocimiento de la libertad se convierte en la herramienta de la lucha política para conquistar espacios más equitativos, mientras que la “condición de igualdad” no es sino el fin a alcanzar.

Por tal motivo, el abismo entre el deber ser y ser del derecho nos conducirá al nivel pragmático antes mencionado, pues al intentar reducir la brecha, nos permite ver la necesidad de transformar los sistemas jurídicos, obligando siempre a la acción política. Incluir el género como una categoría de análisis en el nivel pragmático del ámbito jurídico (y en todas las disciplinas) nos permitirá “visibilizar a las mujeres y mirar cómo todas las relaciones sociales siguen atravesadas en la actualidad por un sistema simbólico imaginario de dominación que subordina a las mujeres en tanto colectivo (Serret, 2008: 52).

Por lo anterior, la lucha política por la conquista de los derechos, en conjunto con la igualdad sustantiva, resultan necesarias para cambiar la condición de subordinación de las mujeres respecto a los hombres, propiciando una relación más justa. No basta con que la igualdad se encuentre inscrita en un ordenamiento jurídico, para materializarla será necesario implementar un modelo de igualdad sustantiva que comprenda: igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades e igualdad de resultados.

Ya se ha expuesto que la validez de un ordenamiento jurídico radica en la garantía del reconocimiento de la libertad de mujeres y hombres, sin embargo, falta reflexionar sobre la justicia y este problema nos lleva plantearnos otro cuestionamiento ¿Por qué las mujeres deben participar activamente en la vida política? La respuesta parece simple, las mujeres deben participar en la toma de decisiones políticas y legislar porque es su derecho como ciudadanas y porque favorece un espacio más justo, pero veamos a qué nos referimos cuando usamos el término de justicia.

Al no existir un criterio universal de justicia vale la pena considerar el principio de reciprocidad entre derecho objetivo y derecho subjetivo, es decir, la obediencia al ordenamiento jurídico a cambio de derechos, sin embargo, la relación entre legalidad y justicia sólo puede mantenerse cuando a partir del reconocimiento “de la libertad de todos los ciudadanos, se abre a la corrección, a partir de la experiencia de los múltiples casos concretos” (Serrano, 2011: 147-148).

Aristóteles distinguió dos sentidos de la justicia: la justicia universal o general y la justicia particular, la primera de ellas va dirigida al terreno de lo legal, mientras que la segunda al de la igualdad. Ambas tienen que ver con un aspecto objetivo y otro subjetivo. El aspecto objetivo remite a las normas, procedimientos e instituciones de la sociedad, y el aspecto subjetivo se refiere al modo de ser de los individuos.

Sin embargo, hay una diferencia entre ellas, pues mientras que la primera “se enfoca a lo que mantiene la unidad de las relaciones, esto es, el bien común; en cambio la segunda se centra en las relaciones de intercambio entre individuos dentro de un orden civil ya constituido” (Serrano, 2011: 155). Cabe aclarar que la justicia particular presupone la justicia universal, es decir, no estamos hablando de dos tipos de justicia, sino que la diferencia entre ellas radica en que la justicia universal se aplica en un sentido amplio o general y la particular se aplica de manera especial o restringida.

Ahora bien, para alcanzar la paridad sustantiva, el criterio de justicia universal Aristotélica, a saber, la igualdad ante la ley, nos resulta indispensable para lograr un espacio más justo, puesto que, para alcanzar tal condición, se requiere que hombres y mujeres participen activamente en el espacio público formal, es decir, que participen en los cargos de elección popular y por lo tanto, que ambos sean parte de la toma de decisiones políticas. Sin embargo, para lograrlo es necesario garantizar una competencia, acceso y ejercicio de poder político en condiciones igualitarias siendo éste el lugar protagónico para la justicia particular.

Con base en Artículo 35 de la CPEUM, establece que uno de los derechos políticos más importantes que tenemos las y los ciudadanos mexicanos es votar y ser votado. Respecto a la primera parte fue a través de la lucha política que las mujeres lograron el derecho a votar, sin embargo, en el segundo aspecto aún existen desafíos pendientes, la realidad nos muestra que cada vez hay más mujeres que ocupan cargos de elección popular y que, por tanto, participan en la toma de decisiones políticas, sin embargo, a pesar del principio de paridad, las condiciones para acceder y ejercer dichos cargos, siguen permeados por desigualdades de género, no obstante, tal como lo sugiere el nivel pragmático de la teoría kantiana, esta situación ha incentivado la lucha política y la búsqueda de alternativas, caminos, estrategias y alianzas para incidir en el ámbito legal y favorecer condiciones paritarias para abrir la posibilidad de crear un escenario político más justo.

La equidad complementa la legalidad, no está fuera de ella, de esta forma su utilidad radica en particularizar con el fin de evitar una incorrecta administración de la justicia, por tanto, esta situación nos permite comprender porque son necesarias leyes o sentencias particulares que atiendan a casos concretos y, como se analizará más adelante, mirar si los principios constitucionales pueden ser válidamente restrictivos. El uso del término igualdad en el ordenamiento jurídico tiene que ver con la aspiración a la justicia, ya que busca que la acción justa sea precisamente aquella que se expresa en una aplicación equitativa y no donde se desdibujan las diferencias sin antes equipararlas, cabe recordar que

“La ley igual para todos es una injusticia, mientras la equivalencia de los derechos y deberes de las mujeres y los hombres-pobres y ricos, indígenas y blancos, asentados y nómadas, rurales y urbanos, jóvenes y viejos, homosexuales y heterosexuales- corresponden a un acercamiento a la justicia, al reconocimiento de diversas formas de ser.” (Gargallo, 2011: 27).

En suma, no basta con que la ciudadanía de las mujeres implique sólo ser legisladoras indirectas, puesto que, si deseamos aspirar a la pretensión de justicia, las mujeres deben participar en condiciones paritarias para acceder a cargos públicos y convertirse en legisladoras directas que discutan y decidan en conjunto con los hombres.

No obstante, es prudente preguntarnos si hay algún régimen que logre materializar una completa justicia, la respuesta es no, pues todos los regímenes son inestables dada la misma condición humana, sin embargo, el menos injusto será aquel que permita la participación tanto de hombres como de mujeres en el ejercicio del poder político y por tanto, que haga realizable, de la mejor forma posible, el principio de igualdad jurídica. Es cierto que tal condición no suprime el conflicto, pues las personas son seres conflictivos y por lo tanto, la política también en ocasiones crea conflicto, pero en otras tantas logra conciliar acuerdos, así que el reto es reconocer e incluir a todos y todas como ciudadanos, procesar las demandas y lograr consensuar a partir de un orden legal común. Una vez alcanzado un piso común de justicia universal, lo importante es luchar por la vía formal y/o informal y no por la lucha violenta que implica el uso de la fuerza. Basta recordar que incluso es más sencillo modificar una ley que la cultura.

Es menester mencionar que las condiciones de equidad se han alcanzado y se seguirán logrando gracias a las luchas políticas, pues la historia de hombres y mujeres nos ha

demostrado que los derechos se conquistan a través de la práctica política y se refuerzan en un ordenamiento jurídico. Esta triangulación entre Filosofía, Derecho y práctica política nos obliga a reconocernos como sujetos activos de transformación y al mismo tiempo, corresponsables de la situación actual.

Una vez que hemos analizado la concepción de la justicia y de la equidad, es preciso señalar qué se entiende por justicia electoral de género, para ello es necesario referir que con mayor frecuencia en la academia se suele hacer uso de la noción de *régimen electoral de género*, entendiéndolo como el conjunto de reformas electorales en materia de género que han buscado incrementar la representación de las mujeres en la política en los cargos de elección popular,² con el fin de impulsar no sólo la representación descriptiva sino también sustantiva de las mujeres. De esta forma, se incluyen todos aquellos mecanismos que han buscado revertir la desigualdad entre unas y otros para dar paso a democracias paritarias, sustantivas e incluyentes.

Ahora bien, con base en lo expuesto anteriormente, la justicia electoral es una parte fundamental del constitucionalismo, entendida como una función del Estado a través de la cual se dirimen y solucionan conflictos surgidos con anterioridad, durante o posteriormente a las elecciones, con relación a la renovación de los integrantes de los poderes públicos (Arreola, 2013: 17) posee un papel relevante ya que de ella depende la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos políticos, su objetivo radica en hacer cumplir las reglas del juego democrático, que dicho juego sea limpio, sin ningún tipo de violencia, donde la cancha sea pareja para todas las personas que aspiran a algún cargo público y donde la voluntad ciudadana sea respetada.

En este contexto, vale la pena preguntarnos sobre el papel de la justicia electoral en la protección y materialización de los derechos político-electorales de las mujeres. De ahí que en esta investigación se pretende apostar e impulsar la noción de justicia electoral de género, como una alternativa que logre ver y revertir la desigualdad histórica y estructural entre hombres y mujeres.

² Véase: Reformas Políticas en América Latina. Régimen electoral de género. Disponible en <https://reformaspoliticas.org/regimen-electoral-de-genero/> (consultado el 3 de junio de 2022).

3. Justicia electoral ¿de género?

El vínculo entre derecho y género es intrínseco para acceder a la justicia electoral. En un país donde el eco de la democracia paritaria es cada vez más exigible, resulta necesario, como señala Tamar Pitch, analizar “cómo el género opera en el derecho y cómo el derecho contribuye a producir el género. El derecho se puede usar porque es útil no sólo en el plano simbólico sino como urdimbre de normas que sostienen y producen justicia social para las mujeres y a la vez libertad femenina” (Pitch, 2003: 256-263).

De acuerdo con la experiencia histórica, es posible advertir que las resoluciones de las sentencias emitidas por el TEPJF constituyen un marco de referencia obligado que ha permitido proponer soluciones empíricas para fortalecer la democracia constitucional mexicana. Algunas de ellas han impactado en reformas legislativas para reducir las desigualdades en la práctica de las reglas del juego democrático entre hombres y mujeres, por lo que, se hace más tangible el vínculo entre el componente democrático y el constitucional, más aún si es desde una hermenéutica constitucional de género.

Respecto a la importancia de juzgar con perspectiva de género, es menester advertir que su influencia ha tenido efectos valiosos en diversos ámbitos de la vida social como: el ámbito laboral (economía del cuidado); cuestiones inherentes a los derechos sexuales y reproductivos (despenalización del aborto, violencia obstétrica, matrimonio igualitario, identidad de género); la importancia del tipo penal del feminicidio; el campo de la bioética (maternidad subrogada); y desde luego, también ha impactado y favorecido en el ámbito electoral (como tipificar el delito de violencia política en razón de género), no obstante, es un campo que falta explorar e impulsar, pues aunque en algunos casos las sentencias han favorecido en reducir la desigualdad entre los géneros, esto no siempre se ha logrado desde una perspectiva de género sino desde lo que se denomina como asertividad tradicional.

En el ámbito electoral, Socorro Apreza Salgado (2013) sostiene que juzgar con perspectiva de género implica:

“Explorar si la aplicación de una norma conlleva discriminación de género mediante la reproducción de desigualdades de poder entre los géneros y dentro de ellos; establecer una estrategia jurídica adecuada para evitar el impacto de la discriminación en el caso específico; siempre reconociendo y evaluando que los roles y características sexuales que se construyen, reproducen e imponen en las sociedades,

pueden traducirse en usos y prácticas que constituyan discriminación y subordinación de las mujeres y hombres en razón de su género” (Apreza, 2013: 37-38).

Ahora bien, es importante destacar que juzgar con perspectiva de género, implica que los efectos de las sentencias, su ejecución y argumentación se encuentren permeados por dicha perspectiva, por ello, en coincidencia con Karina Ansolabehere, vale la pena distinguir los siguientes aspectos:

- a) Asertividad judicial: Es la condición necesaria para la identificación de las conductas judiciales de independencia positiva; si los jueces y los tribunales presentan conductas deferentes respecto de los actores poderosos, no podría hablarse de independencia positiva.
- b) Asertividad judicial tradicional: Es una decisión favorable a una interpretación integral de la medida pero con una ideología jurídica tradicional respecto al género.
- c) Ideología legal: Siguiendo a Roger Cotterrell, consiste en el conjunto de ideas y creencias arraigadas, moldeadas por la práctica profesional del derecho, y producidas por la doctrina legal. Para Ansolabehere, es la característica interna de la decisión que expresa las ideas del derecho que impregnan el accionar judicial y permiten calificar la independencia positiva.
- d) Ideología legal tradicional: Coloca a la ley antes que la justicia respecto del grupo desprotegido.
- e) Ideología legal de género: Concibe al derecho desde la perspectiva de género, es decir, implica que el centro de la decisión debe ser favorable para el grupo desventajado (Ansolabehere, 2014: 25).

Ahora bien, respecto a la identificación de actores, la autora identifica tres tipos, a saber: a) actores de primer plano: corresponden a las partes que intervienen directamente; b) actores de segundo plano: aquellos cuya decisión o falta de ésta no ha contribuido a la controversia; c) actores de tercer plano: son aquellos que, si bien no intervienen en la controversia de manera directa, tienen una presencia indirecta en ésta por el lugar que ocupan en la jerarquía judicial (Ansolabehere, 2014: 36).

En el mismo sentido, respecto a la importancia de juzgar con perspectiva de género, a partir de un análisis de seis sentencias, Janine Otálora Malassis (2015), evidencia cómo

para transitar de las cuotas de género al principio de paridad en México, el trabajo jurisdiccional jugó un papel fundamental a partir de la interpretación y reconocimiento del principio de igualdad jurídica ampliamente vinculado al de no discriminación, cuya triangulación de principios fue útil para revertir la subrepresentación de las mujeres y para desarrollar progresivamente la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres hasta llegar a la paridad sustantiva. Esta retrospectiva muestra también que las sentencias en materia de género sirvieron de base para diseñar las reglas del juego democrático que posteriormente serían parte de las reformas constitucionales de 2014 y 2019 en materia de paridad, mostrándonos el impacto del trabajo jurisdiccional en el ámbito legislativo.

Como podemos apreciar, el trabajo jurisdiccional tiene un papel sumamente importante para equilibrar las reglas del juego democrático, pero también para asegurar que los derechos humanos, en este caso, los derechos político-electorales de todas las personas se respeten, mostrándonos su trascendencia en las dos dimensiones que constituyen la democracia constitucional.

Ahora bien, con base en lo anterior, es importante destacar que cuando nos referimos a la justicia electoral de género implica juzgar considerando las desigualdades históricas estructurales que persisten entre unas y otros sin perder de vista otras miradas a las que ya hemos hecho referencia en el primer capítulo: intercultural, decolonial y antirracista, con el fin de poder aplicar las nociones de justicia particular a cada caso concreto desde una noción de justicia universal.

CONCLUSIONES

Desde el ámbito académico cada vez aparece con mayor frecuencia la noción del régimen electoral de género, por ello, la apuesta por contribuir a la reflexión y construcción de una justicia electora de género requiere darle su lugar a los diversos feminismos y a sus procesos históricos que han contribuido a la ciudadanía de las mujeres y sin los cuales no podríamos explicar la exigencia actual por una democracia paritaria, sustantiva e incluyente.

La vigencia de los estudios de género en la democracia constitucional mexicana responde al interés por identificar las desigualdades en el ejercicio de los derechos políticos, de libertad y sociales hasta lograr un piso parejo y estar así, en condiciones de igualdad para jugar, las reglas de juego democrático.

Construir la igualdad jurídica entre mujeres y hombres requiere de un trabajo multidisciplinario que nos permita analizar y proponer soluciones desde diversas perspectivas. El camino aún es largo e incluso inacabado, pero el aquí y ahora exige actuar por transformaciones urgentes y necesarias y no detener la lucha política en la búsqueda y garantía de derechos que aún faltan por conquistar.

Finalmente, es necesario insistir que la justicia electoral, debe ser analizada desde la perspectiva de género, entendiéndola como una inminente perspectiva que busca erradicar el carácter androcéntrico que aún persiste al discutir, diseñar y aplicar el Derecho. Con las diversidades de feminismos, el desafío es replantear la justicia electoral, cuyo enfoque deje de lado cualquier pretensión elitista y androcéntrica, es decir, que sea una justicia electoral de género que también haga frente a la colonialidad del poder y del saber (Curiel 2007, 101) y cuyo fundamento y fin tenga en su base al principio constitucional de paridad.

BIBLIOGRAFÍA

- Ansolahehere, Karina. 2014. *Asertividad Tradicional. Las cuotas de género y su interpretación judicial*. México: TEPJF.
- Apieza, Socorro. 2013. *La sentencia ST-JDC-86/2010, un ejemplo de juzgar con perspectiva de género*. México: TEPJF.
- Arreola, Álvaro. 2013. *La justicia electoral en México. Breve recuento histórico*. México: TEPJF.
- Córdova Vianello y Pedro Salazar, coords. 2007. *Política y Derecho [Re] pensar a Bobbio*. México: UNAM-IIIJ-Siglo XXI
- Curiel, Ochy. 2007. “Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista”. *Nómadas*, núm. 26, pp. 92-101.
- . 2011. Los límites del género en la teoría y la práctica política feminista. En *El género: una categoría útil para las ciencias sociales*, coords. Luz Gabriela Arango Gaviria y Mara Viveros Vigoya, 203-226. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Escuela de Estudios de Género.
- Gargallo, Francesca. 2011. La justicia, las demandas de ciudadanía y las frustraciones ante los derechos humanos de las mujeres. En *¿Y usted creer tener derechos? Acceso a las mujeres mexicanas a la justicia*. coords. Irma Saucedo y Lucía Melgar. México: UNAM-PUEG, pp. 25-40.
- Pitch, Tamar. 2003. Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad. México: UNAM-Trotta
- Riddall, J.G. 1999. *Teoría del derecho*. España: Gedisa.
- Salazar, Pedro. 2007, “Democracia: ¿formal o sustantiva? El problema de las precondiciones en la teoría de Norberto Bobbio”. En Córdova y Salazar, 2007, pp. 240-255.
- . 2013. *La democracia Constitucional. Una radiografía teórica*, 3ª. reimpr. México: FCE-IIIJ-UNAM.
- Scott, Joan. 2013. *El género: Una categoría útil para el análisis histórico*. En Lamas 2013, pp. 265-302.
- , Joan. 2012. *Parité! Equidad de género y la crisis del universalismo francés*. México: FCE.
- . 2011. “Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?” En *La Manzana de la discordia*, Enero-Junio, Año 2011, Vol. 6, No. 1: pp. 95-101.
- Serrano, Enrique. 2005. “La teoría Aristotélica de la justicia” en *Revista ISONOMIA*. No. 22, pp. 123-159.

- _____. 2011. *Política Congelada. Una introducción a la Filosofía del Derecho*. México: Fontamara.
- Serret, Estela, coord. 2012. *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*. México: SCJN-Fontamara.
- _____. 2008. *Qué es y para qué sirve la perspectiva de género*. Libro de texto para la asignatura: Perspectiva de género en la educación superior. Oaxaca: Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
- _____ y Jessica Méndez. 2011. *Sexo, género y feminismo*. México: SCJN-TEPJFIEDF.

ARTÍCULOS EN LÍNEA

- Freidenberg, Flavia y Karolina Gilas. 2019. “En nombre de los derechos y a golpe de sentencias: el impacto de la justicia electoral sobre la representación política de las mujeres mexicanas”. Texto preparado para su discusión en el Seminario Permanente de *Reformas electorales y democracia*, disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/index/seminarioreformaselectorales-freidenberg-y-gilas-4408.pdf> (consultada el 21 de agosto de 2021).
- Otálora, Janine (2015). “La evolución del principio constitucional de paridad de género en la jurisprudencia”. *Quid Iuris*, Año X, Volumen 31 (diciembre-febrero), pp. 31-51, disponible en <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34573.pdf> (consultada el 30 de noviembre de 2021).

LEGISLACIÓN

- CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2014. Tomo I. México: INE/FEPADE/UNAM/IIJ-UNAM/TEPJF.